



MÚLTIPLES CRISIS, FEUDALISMO DEL AGRONEGOCIO Y MONOPOLIZACIÓN DE TERRITORIOS CAMPESINOS:

UNA VISIÓN DESDE ECUADOR SOBRE LA AGROBIODIVERSIDAD Y LA RED DE LA VIDA CAMPESINA

ENSAYO DE DEBATE

MARZO 2021



Serie de múltiples crisis en África

La investigación para los ensayos de debate de esta serie fue realizada en condiciones adversas creadas por la pandemia de COVID-19 y la consecuente cuarentena y restricciones de viaje. Por ello, los investigadores del Centro Africano por la Biodiversidad (ACB) no pudieron viajar a los países objeto de estudio para la investigación de campo. Por lo tanto, estamos profundamente agradecidos con nuestros socios locales, que brindaron el apoyo necesario en los países de interés (pero que también estaban limitados por cuarentenas y otras restricciones en sus países) y a otros informantes clave que suministraron información invaluable. Por esta razón los ensayos de debate tienen la intención de mostrar un panorama amplio de las crisis vividas por las personas en los países de interés y una mirada introductoria a las interconexiones entre los procesos que conducen a estas dificultades. El ACB posee un extenso historial de producción de investigaciones confiables y de alta calidad, pero cualquier error o punto ciego en esta serie de investigaciones se atribuye al ACB. Cualquier aporte es bienvenido a medida que progresamos en nuestro proyecto de conocimiento y cambio colectivo.

El Centro Africano para la Biodiversidad (ACB por sus siglas en inglés) tiene una larga y respetada trayectoria en investigación y cabildeo. Nuestro enfoque geográfico actual es el sur y el este de África, con amplias redes continentales y globales. Trabajamos en investigación, análisis, cabildeo e intercambio de destrezas y buscamos informar y amplificar las voces de los movimientos sociales que luchan por la seguridad alimentaria en África.



www.acbio.org.za
PO Box 29170, Melville 2109, Johannesburg, South Africa.
Tel: +27 (0)11 486 1156

Acción Ecológica es una organización ecuatoriana creada en 1987. Su misión es la defensa de los derechos de la naturaleza, y los derechos humanos, incluyendo los derechos individuales y colectivos de los pueblos, mediante el empoderamiento de los sujetos de derecho, facilitando procesos de formación, información, e incidencia a nivel local, nacional e internacional. También forma parte de la misión de Acción Ecológica, visibilizar y trabajar sobre los impactos diferenciales que todas estas temáticas suponen en las mujeres e implementar acciones que permitan combatirlas. Acción Ecológica cuenta con un plan estratégico específico de igualdad, que analiza las situaciones y contextos en donde las mujeres son más vulnerables a los conflictos socio-ambientales. Acción Ecológica es una organización que está conformada en un 80% por mujeres y los cargos directivos están ocupados en un 90% igualmente por las mujeres. Uno de los principios establecidos desde su creación, ha sido la acción positiva a favor del trabajo con mujeres, desde una perspectiva de género.



www.accionecologica.org
Alejandro de Valdez N24-33 y Av. La Gasca, Quito, Ecuador
+593 2 321 1103



Esta publicación está licenciada bajo Creative Commons (licencia internacional de atribución no comercial sin obra derivada 4.0). Esta publicación puede ser compartida sin modificación para uso no comercial siempre que se reconozca como fuente al Centro Africano para la Biodiversidad. Cualquier uso comercial del material o los datos derivados de esta publicación requiere un consentimiento escrito.

Investigado y escrito por Alexander Naranjo Márquez y Elizabeth Bravo Velásquez

Editor : Liz Sparg

Traducción: Mariana Abram

Imagen de portada, diseño y disposición: Xelos Design Consultants

Agradecimientos

Gracias a Alexander Naranjo Márquez y Elizabeth Bravo Velásquez por investigar y escribir este informe. Al ACB le gustaría agradecer a sus amigos, colegas e informantes clave por su invaluable información, tiempo y aportes para esta investigación. El ACB agradece, además, el apoyo generoso de donantes varios. Los puntos de vista y opiniones expresadas en este informe corresponden al ACB, y no necesariamente reflejan la política oficial o la posición de nuestros donantes.

Contenido

Lista de acrónimos y abreviaturas	4
Sobre este ensayo	5
Hallazgos claves	6
Introducción	8
Producción industrial del maíz en el Ecuador	10
Una nueva matriz productiva: El momento para el agronegocio	12
Una crisis fitosanitaria de maíz	15
El terremoto de 2016	17
El regreso al neoliberalismo: La gran Minga Agropecuaria	18
Políticas relacionadas a las semillas durante la pandemia de COVID-19	19
La política pública como una puerta de acceso a las semillas genéticamente modificadas	20
Expansión de la frontera del agronegocio sobre los ecosistemas naturales	23
Choques múltiples, política e interés corporativo	23
Los campesinos pagan el precio, mientras el agronegocio se ríe durante todo el camino hasta el banco	25
La cooptación, el feudalismo del agronegocio y la monopolización de territorios campesinos	27
Nuestra visión de futuro	28
Conclusiones	29
Apéndice 1: Compañías que se benefician de la cadena de valor del maíz industrial	30
Referencia	32



Lista de acrónimos y abreviaturas

Agrocalidad	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario
ECUASEM	Asociación Ecuatoriana de Productores, Comercializadores, Importadores y Exportadores de Semillas
FISP	Programa de Subvención de Insumos para Agricultores
GM	Modificado genéticamente
OGM	Organismo modificado genéticamente
GMA	Gran Minga Agropecuaria
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador
INIAP	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
NMP	Nueva matriz productiva

Sobre este ensayo

Este ensayo de debate es parte de la “Serie de múltiples crisis en África” del ACB, un conjunto de ensayos de debate que examinan las crisis que afectan al continente en el contexto de crisis sistémicas, las fuerzas que revelan y las implicaciones políticas que pronostican para los movimientos organizaciones de la sociedad civil y legisladores.

Dada la necesidad de internacionalismo y solidaridad con todas las clases populares del mundo. Este ensayo añade una perspectiva desde Ecuador en América del Sur, e ilustra cómo las múltiples crisis están relacionadas, de igual forma, al avance de la agricultura industrial, organizacional y ataques a la red de vida campesina. El ensayo nos recuerda la necesidad de mantener un punto de vista amplio de los imperativos de confrontar un sistema global de destrucción con la solidaridad global consonante, las alternativas sistémicas y la acción política concertada a múltiples niveles.

En este ensayo analizamos cómo el Estado ecuatoriano ha tomado ventaja de múltiples crisis para introducir el modelo agro-industrial en las áreas campesinas, en particular a través de la promoción de monocultivos de maíz con semillas y aportes organizacionales. El maíz resulta de interés particular debido a que Ecuador es parte de uno de los más grandes centros de origen de plantas de cultivo en el mundo, y si bien es cierto que el país no es el centro de origen del maíz, es un centro de diversidad para el cultivo. Precisamente en un tiempo en el que se hace más claro lo crucial que es la biodiversidad para un planeta más sano y para la supervivencia humana (no otorgándole la menor prioridad, como quedó demostrado por la emergencia de la pandemia de COVID-19), el estado ecuatoriano está promoviendo la expansión del monocultivo homogeneizado de maíz en ecosistemas intactos y territorios campesinos.

El ensayo evidencia cómo las políticas del Estado han apoyado la consolidación de los intereses en torno a la agricultura industrial, que luego están listos para saltar cuando las crisis golpean al sector campesino. Por lo tanto, las sacudidas revelan con gran relieve los intereses que se organizan en torno a la agenda política del Estado. Sin embargo, cuando el modelo y sus insumos subvencionados fracasan, son los campesinos quienes soportan la carga económica. El agronegocio no pierde nunca, ya que el Estado y los campesinos siguen pagándoles por sus insumos, y cuando se produce un desastre, evaden cualquier responsabilidad ante los campesinos. La política del Estado, por lo tanto, facilita nada menos que el atraco corporativo a la agricultura popular en medio de múltiples y agravantes shocks.

Exponemos, por tanto, cómo la política estatal está ayudando a construir una situación de “feudalismo del agronegocio” y de monopolización del territorio campesino –tierra, semillas, agua y recursos– y por tanto de la vida campesina. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha demostrado que las comunidades campesinas más resistentes son aquellas que conservan sus propias semillas, aplican métodos agroecológicos y gestionan sus cadenas de comercialización. Esto demuestra, por tanto, que en una era de crisis agravadas, es imperativo para la supervivencia, que los sistemas alimentarios y el apoyo agrícola estatal se vuelvan a fundir en la red de vida de los campesinos. Pero para que esto suceda se requiere un profundo trabajo político desde abajo, para continuar construyendo el poder para enfrentar las fuerzas ecodidas de destrucción como las que están engendrando la feudalización de los agronegocios del campo.

Hallazgos claves

- Múltiples crisis han estado golpeando a regiones de todo el mundo, pero con efectos particularmente duros en el Hemisferio Sur. El agronegocio y su modelo agrícola industrial son los principales impulsores de la catástrofe ecológica mundial que reflejan los shocks. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, en colaboración con los agronegocios, sigue promoviendo la expansión de las zonas de monocultivo industrial de maíz mediante una serie de políticas públicas que incluyen paquetes de insumos agrícolas o “paquetes de ayuda agropecuaria”. Esto forma parte de los esfuerzos del Estado por industrializar el sector agrícola campesino e integrar aún más el sector en las cadenas empresariales de agronegocios, a pesar de su compromiso con la soberanía alimentaria en la Constitución Nacional.
- El maíz es sin dudas el principal motivo de preocupación, ya que el Ecuador, como parte de la región andina, es uno de los mayores centros de origen de plantas cultivadas del mundo (Tapia y Morillo, 2006) y, si bien el país no es centro de origen del maíz, sí es un centro de diversidad para el cultivo. Precisamente en un momento en el que cada día se hace más evidente lo imperante que es la biodiversidad para un planeta sano y para la supervivencia humana (no en último lugar como lo demuestra la aparición de la pandemia COVID-19), el Estado ecuatoriano está promoviendo la expansión del monocultivo homogeneizado de maíz industrial en ecosistemas y territorios campesinos intactos.
- Las políticas del Estado también han apoyado la consolidación de los intereses en torno a la agricultura industrial, que aprovecha los momentos de crisis para saltar cuando las crisis golpean al sector campesino. Los shocks revelan con gran relieve los intereses que se organizan en torno a la agenda política del Estado.
- El Estado utiliza las crisis, incluyendo terremotos, inundaciones, infestaciones de plagas y COVID-19, para seguir implementando políticas que no serían posibles en otras circunstancias, como la profundización de su programa de “paquetes de ayuda agrícola”, permitiendo que más empresas privadas entren en la bonanza de extraer valor del sector campesino. Esto también incluye la entrada de semillas de maíz genéticamente modificado (GM) en el país debido a la relajación de medidas fitosanitarias.
- Por consiguiente, los shocks se utilizan para consolidar esta agenda de agricultura industrial, en la que se elude la transformación del campo y la redistribución a favor de las clases populares para centrarse de forma singular en el aumento de la productividad, mediante la promoción de un número reducido de productos agrícolas que son rentables para los agronegocios aguas arriba y aguas abajo de la agricultura; en este caso, el maíz.
- Entre los beneficiarios de este sistema figuran los agentes de los agronegocios que participan en la cadena de valor del maíz comercial. Se espera que las comunidades campesinas y los pequeños agricultores familiares sacrifiquen la agrobiodiversidad y la fertilidad de sus tierras, sus variedades de semillas tradicionales o campesinas, su autonomía y su capital financiero, al integrarse a la modernización capitalista en el campo.
- No obstante, cuando el modelo y sus insumos subsidiados fracasan, son los campesinos quienes asumen la carga económica. El agronegocio no pierde nunca, ya que el Estado y los campesinos les pagan por sus insumos, y cuando se produce un desastre, se lavan las manos de cualquier responsabilidad ante los campesinos. Los paquetes de ayuda agrícola permiten una extracción económica sin riesgos por parte de la agroindustria de los campesinos y facilitan una forma de despojo.
- Mediante estos procesos, los monocultivos de maíz se han expandido hacia las tierras más fértiles del país y, en los últimos

años, hacia ecosistemas intactos. Tras varias crisis, los monocultivos han consolidado las políticas públicas, los subsidios y las cadenas de valor. Esto está construyendo lo que se ha llamado el feudalismo del agronegocio y la monopolización del territorio campesino – tierra, semillas, agua y recursos.

- Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha demostrado que las comunidades campesinas más resistentes son aquellas que conservan sus propias semillas, implementan métodos agroecológicos y manejan las cadenas de comercialización. Por lo tanto, es necesario ejercer presión para que el Estado apoye la agricultura campesina basada en cooperativas campesinas, los derechos de los agricultores y los sistemas de semillas e insumos apropiados de origen local. El modelo actual de “Paquetes de ayuda agrícola” y agronegocios está

despojando a las comunidades rurales de las bases mismas de la supervivencia que necesitan en medio de crisis agravadas. Por consiguiente, es necesario que los sistemas alimentarios y el apoyo agrícola estatal se vuelvan a fundir en la red de vida de los campesinos.

- El gran desafío para las comunidades campesinas y otros movimientos sociales a este respecto es mantener el país libre de organismos genéticamente modificados (OGM) y promover la soberanía alimentaria, la biodiversidad agrícola y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la cooptación de las organizaciones campesinas y la consiguiente construcción de un sujeto campesino homogéneo, consumista, endeudado y estrechamente productivista muestra la necesidad de un trabajo político profundo desde abajo para seguir construyendo el poder para enfrentar las fuerzas ecocidas destructoras.



Introducción

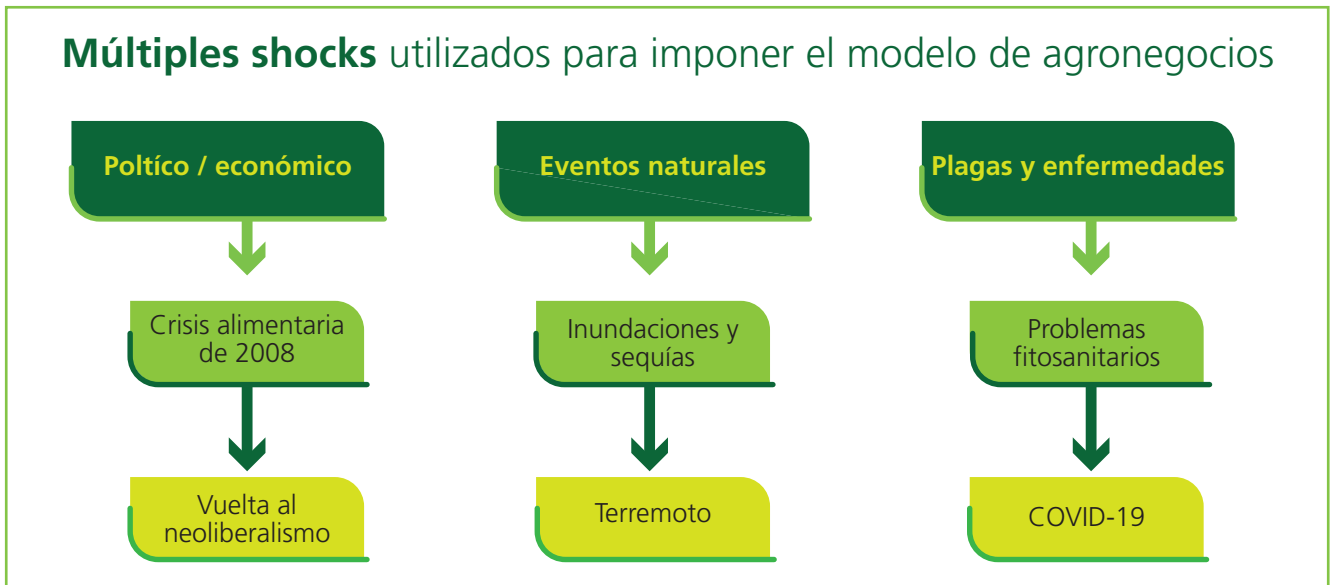


Figura 1: Múltiples shocks utilizados para imponer el modelo de agronegocios

Ecuator, situado en América del Sur, es un país pequeño pero extremadamente diverso. Alberga 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas diferentes, que conviven con comunidades afrodescendientes, montubias¹ y campesinas mestizas, en zonas rurales.

Con una superficie de 256.370 km², se considera que el Ecuador tiene los mayores rangos de biodiversidad por unidad de área del mundo. En él se encuentran por lo menos dos centros de origen de los cultivos: el andino y el amazónico, aunque, según Piperno (2011), el cultivo de plantas comenzó en períodos muy tempranos de la historia de la humanidad en la costa del Pacífico de América del Sur. Según Gortaire (2016), en el Ecuador existen al menos ocho sistemas agrícolas patrimoniales.

Desafortunadamente, el avance de los agronegocios, el extractivismo, las represas hidroeléctricas y la urbanización no planificada están amenazando la riquísima biodiversidad del país, incluida la agrobiodiversidad y los sistemas agrícolas patrimoniales que la sustentan.

¹ Montubio significa gente de la montaña. Son campesinos de la región costera del Ecuador, que se dedican a la agricultura de subsistencia, vendiendo los excedentes localmente, pero que están cada vez más influenciados por la agricultura industrial.

Una de estas amenazas es la producción industrial de maíz, que ha logrado arraigarse en el Ecuador a través de una serie de estrategias desplegadas por las empresas, con el apoyo del Estado en momentos de crisis o shocks. Estas tácticas –denominadas “doctrina del shock” por Naomi Klein (2014)– son cada vez más comunes.

El Estado ha venido aplicando sistemáticamente políticas de apoyo a la agricultura industrial, y los múltiples shocks que están afectando al país y al sector campesino no sólo reducen la capacidad de resistencia de los campesinos, sino que constituyen una plataforma para promover este programa de políticas y los intereses de los sectores empresariales que se benefician de esas políticas. Los shocks incluyen eventos naturales extremos (como terremotos y sequías) así como la aparición de plagas o enfermedades que deben entenderse dentro del desequilibrio ecológico creado por la agricultura de monocultivo. Las crisis afectan tanto a las agrobiodiversidad como a las poblaciones humanas, y están relacionadas con los sistemas políticos y económicos.

Lo que Klein plantea en su tesis sobre la doctrina del shock, o el “Auge del capitalismo del desastre”, es que las condiciones de crisis se

utilizan para tomar decisiones y aplicar políticas que son ampliamente impopulares y que sólo benefician a unos pocos poderosos, y permiten así evitar la participación democrática popular, la rendición de cuentas o la resistencia. Como se analiza en este documento, las condiciones de crisis en el Ecuador se han utilizado para aplicar políticas que promueven la agricultura industrial en el campo.

El monocultivo de maíz se ha expandido hacia las tierras más fértiles del país y, en los últimos años, hacia los ecosistemas no perturbados. Las políticas públicas, los subsidios y las cadenas de valor también se están consolidando en torno a esta expansión del monocultivo de maíz, que beneficia a la mayoría de los actores involucrados, excepto al campesinado.

El maíz es el principal motivo de preocupación, ya que el Ecuador forma parte de uno de los mayores centros de origen de plantas cultivables del mundo (Tapia y Morillo, 2006), y aunque el Ecuador no es el centro de origen del maíz, es un centro de diversidad para el cultivo. En el sitio Las Vegas, situado en la costa meridional del Ecuador, se cultivaba maíz hacia 7170 años A.C. (Pipermo 2011). En 1966, una misión científica internacional se sorprendió tras constatar la inmensa biodiversidad del maíz en un país tan pequeño. Señalaron que esto se debía a los contrastes geográficos y su historia del país, con fuertes influencias del norte y del sur del continente. En su estudio, identificaron 29 razas de maíz (Timothy et al., 1966).

Sin embargo, un pequeño grupo de empresas de agronegocios² monopoliza la cadena de valor del maíz y las aves de corral, ejerciendo un control sobre los campesinos y sus territorios. El Estado ecuatoriano, en colaboración con los agronegocios, ha promovido la expansión de las áreas de producción de maíz, a través de una serie de políticas públicas que incluyen paquetes tecnológicos llamados kits de cultivo o paquetes de ayuda agropecuaria. Estos funcionan esencialmente de manera similar a los programas de subsidios a los insumos agrícolas (FISP) (por sus siglas en Inglés) que el ACB ha investigado y criticado ampliamente en el contexto del África meridional. De esta manera, el monocultivo de maíz se ha expandido hacia las tierras más fértiles del país y, en los últimos años, hacia los ecosistemas no perturbados. Las políticas públicas, los subsidios y las cadenas de valor también se están consolidando en torno a esta expansión del monocultivo de maíz industrial, que beneficia a la mayoría de los actores involucrados, excepto al campesinado. Los campesinos renuncian a su agrobiodiversidad, a la fertilidad de sus tierras, a sus variedades de semillas tradicionales o campesinas, a su autonomía y a su capital financiero para integrarse a esta modernización capitalista del campo.

En este ensayo analizaremos cómo el Estado ha aprovechado diferentes momentos de shock para introducir el modelo agroindustrial en las zonas campesinas y, en particular, el maíz industrial. Esto se ha llevado a cabo mediante la aplicación de políticas públicas, especialmente de subsidios agrícolas. También ofrecemos un análisis de las políticas públicas que se han implementado para potenciar el monocultivo de maíz, aprovechando los diferentes shocks que ha vivido el país en las últimas décadas.

Para aprovechar un shock, los intereses poderosos deben estar en una posición de fuerza y debe haber una base material desde la cual lanzarse. Por lo tanto, pasamos ahora a analizar cómo las políticas públicas han venido

2 El término agroindustria o agronegocio se utiliza en este documento para referirse a un sistema que se basa en la agricultura industrial y que fomenta el control por parte de grandes empresas nacionales o transnacionales de todos los aspectos de la producción agrícola, incluido el suministro de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimentaria) y la comercialización de la producción, tanto para el mercado interno como para la exportación

promoviendo la producción industrial de maíz en el campo y fortaleciendo los intereses empresariales involucrados en la cadena de valor del maíz industrial. Esto ha facilitado la consolidación de poderosos intereses capaces de aprovechar los shocks para profundizar en el modelo de agronegocios de producción de maíz y posicionarlo como el único modelo supuestamente disponible para mejorar los medios de vida de los campesinos. Examinamos dos períodos: 2007-2017 (durante el período presidencial de Rafael Correa) y 2017-2020 (regresión neoliberal, dirigido por Lenin Moreno), haciendo hincapié en las siguientes crisis: la crisis alimentaria de 2008 y el paso de la “gran noche neoliberal” al “progresismo latinoamericano” de la Nueva Matriz Productiva (NMP); el terremoto de 2016; las crisis fitosanitarias y la crisis de COVID-19.



CRÉDITO DE LA FOTOGRAFÍA: GRANJA DE MAÍZ - LOS RÍO, ELIZABETH BRAVO

Producción industrial del maíz en el Ecuador

El maíz es el principal cultivo de ciclo corto en superficie sembrada en el Ecuador, lo que refleja su valor material y simbólico para las poblaciones campesinas. Hay dos formas muy distintas de cultivar maíz. En el primer

modelo de producción, el maíz se cultiva para el consumo en la finca y para el mercado nacional interno en toda la región andina, la región amazónica y progresivamente menos para la región costera del Ecuador. También se cultiva generalmente en chacras o fincas campesinas, junto a cultivos asociados y rotación de cultivos, con los agricultores utilizando sus propias semillas las cuales adquieren en ferias de semillas, mediante el trueque o comprándolas en los mercados locales.

El segundo modelo de producción de maíz está orientado a la producción de maíz industrial, desarrollado por pequeños y medianos productores que dependen por completo de los agronegocios para acceder al crédito, las semillas, los fertilizantes y los productos agroquímicos. Este tipo de maíz es un insumo primario en la cadena de agronegocios para alimentar: las cadenas industriales avícolas y porcinas.

En el Ecuador, la producción industrial de maíz está en gran medida en manos de pequeños campesinos que dependen en su mayoría de la mano de obra familiar³. El sistema industrial de producción de maíz se inició a finales de los años 70 y fue adoptado plenamente a principios de los 90 durante el repunte de las políticas neoliberales en el Ecuador (Gaibor, 2018). Según el Ministerio de Agricultura (MAG) (2019), el 95% de los productores cultivan superficies de entre 1 y 10 hectáreas (con un promedio de 4,57 hectáreas). Abastece el 89% de toda la producción de maíz industrial del país. Más del 74% son terratenientes, y el 22% alquilan la tierra que siembran. En 2018 se sembraron 383.300 hectáreas de maíz, que representan el 40,7% de la superficie total de cultivos anuales sembrados (ESPAC, 2018).

En 2019 el 80% de los productores de maíz tenían, en promedio, 46 años de edad y cuentan con un promedio de 7 años de educación cursada (MAG) (2019). Además, sólo el 42% de los productores estaban asociados a organizaciones productoras. Mientras que los asociados reciben beneficios de producción y tienen acceso a la capacitación

³ Una encuesta realizada en Mocache durante el año 2016 mostró que el 29% de los productores de maíz dependen exclusivamente de la mano de obra familiar y el 48% empleó tanto mano de obra familiar como trabajadores asalariados contratados para actividades especializadas (Zambrano, 2016).

y a la oportunidad de negociar precios con los comerciantes, el 58% de los productores de maíz deben sostener individualmente sus condiciones de producción en términos de acceso al crédito (banca pública o privada), a los insumos agrícolas, a las cuestiones de cosecha, al comercio y a la especulación de precios.

La producción industrial de maíz no está vinculada a la soberanía alimentaria, ya que no se destina a la seguridad alimentaria local sino a la alimentación de las industrias avícolas y porcinas del país. La cadena de valor es priorizada y promovida por el Estado en conjunto con las asociaciones de agronegocios. No obstante, los agricultores se enfrentan a una serie de problemas para llevar el maíz cosechado a los centros de producción de alimentos, especialmente en lo que respecta a la especulación de precios⁴. En 2019, el MAG informó que el 58% de los productores de maíz entregan su producto a intermediarios y sólo el 36% comercia directamente con centros de recolección de granos.

La producción de maíz para la agroindustria hace uso de las tierras más fértiles en el país, y puede encontrarse en 22 de las 24 provincias. Los principales centros de producción de maíz industrial están localizados en la cuenca baja del Río Guayas, varios territorios en Manabí y la zona costera de Loja, lo cual representa el 93,5% de toda la producción de maíz industrial.

⁴ Las condiciones establecidas para obtener el precio oficial son: 13% de humedad y 1% de impurezas. Antes de la compra, los intermediarios/centros de compra realizan controles básicos de humedad e impurezas. Se impone una multa cuando no se cumplen estos requisitos especificados (Agurto, 2017).



Una nueva matriz productiva: El momento para el agronegocio

Cuando el progresismo⁵, a través de la “Revolución Ciudadana”, asumió el poder en Ecuador en 2006, lo hizo en medio de una profunda crisis política. Los ciudadanos habían derrocado varios gobiernos (neoliberales), Ecuador estaba enfrentando una importante deuda externa y una crisis económica general, y el gobierno debía hacer frente a la gran crisis alimentaria de 2007-2008.

El nuevo gobierno convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente con la intención de refundar el país. Aunque la constitución resultante de 2008 reconoce la soberanía alimentaria como un derecho y obligación del estado (Art. 281 y 282) y prohíbe la introducción de semillas y cultivos modificados genéticamente (Art. 281), también estipula la posibilidad de que el presidente revoque esta prohibición si surgen razones de interés nacional (Art. 401)

Con la nueva constitución emergió la oportunidad de emprender un proceso participativo con varios sectores campesinos para construir un sistema agroalimentario alternativo. Por ejemplo, una serie de propuestas legislativas participativas relacionadas con el agua, tierra y semillas⁶ fueron inicialmente puestas en marcha. A pesar de esto, los proyectos que fueron



aprobados por la Asamblea Nacional sirvieron para consolidar un proyecto neoliberal en el campo. Lo mismo ocurrió con las políticas públicas. Valiéndose del argumento de la gran crisis alimentaria de 2008, uno de los sectores constituyentes relacionados al agronegocio impuso un Mandato Agrario, el cual fue impulsado como un fortalecedor del agronegocio, especialmente para el mercado nacional, incluyendo la cadena de valor de maíz-aves de corral.

Este mandato fue propuesto para generar una serie de subsidios dirigidos principalmente al agronegocio con la finalidad de reducir el precio de la comida en el mercado nacional. De manera consecuente, un paquete de más de US\$400 millones en subsidios y exenciones de aranceles directas e indirectas, fue aprobado, incluyendo exoneraciones de impuestos para importadores de agroquímicos, y subsidios para algunos productos procesados e insumos agrícolas (León, 2018).

Más tarde, en 2013, el gobierno anunció una Nueva Matriz Productiva (NMP) que establecía

⁵ El progresismo es una tendencia política en algunos países de América Latina, como una respuesta al neoliberalismo. Cuando el progresismo ocupa el poder, si bien tiene distintas variantes en cada país, se caracteriza por el fortalecimiento del estado y la implementación de políticas redistributivas.

⁶ Estas propuestas incluyen consultas pre-legislativas, como un mecanismo para la participación ciudadana, reconocidas en la constitución ecuatoriana.

una nueva agenda para la transformación del campo, con una clara tendencia hacia un modelo basado en la productividad, y en aras del agronegocio y la producción de insumos básicos para la agricultura de exportación. Como señaló Houtart (2016), este fue un momento de subordinación de la agricultura al capital.

Una de las principales estrategias planteadas fue la sustitución de las importaciones. Se propuso un incremento de 495000 toneladas métricas en la producción de maíz para surtir al agronegocio. En términos de tecnología, se impulsó la agricultura de precisión (sin embargo, nunca fue implementada) acompañada por la promoción de esquemas crediticios del gobierno bajo el marco de un modelo inclusivo de negocio. Finalmente, se promovió la agricultura por contrato, donde los campesinos recibirían insumos por parte de compañías agrícolas a manera de préstamos, los cuales se pagarían posteriormente por medio de su producción. Dentro de este sistema de producción, los campesinos asumen la mayoría de los riesgos económicos y ambientales (Acción Ecológica, 2013).

La agricultura por contrato establece relaciones no remuneradas con el campesinado, con el fin de asegurar el suministro de materia prima para las compañías avícolas y porcinas dentro del agronegocio, permitiendo a los grupos monopólicos a lo largo del país consolidarse como cadena de valor del maíz para piensos, especialmente la compañía llamada Pronaca⁷. Este mecanismo de vinculación de las cadenas de valor condujo, en algunos casos, al endeudamiento del campesinado.

Otro componente de la NMP fue la intensa promoción del uso de semillas de alto rendimiento, lo cual condujo a los productores hacia lo que puede definirse como una dependencia tecnológica, como ha sido el caso con los FISP africanos. Esta dependencia no ocurrió únicamente en términos de semillas, sino en el paquete de insumos o paquete de ayuda agrícola, el cual incluye pesticidas, fertilizantes y mecanización.

7 En 2017, Pronaca vendió el 50% de sus acciones a la "Corporación Multinversiones" (CMI), de origen centroamericano (Guatemala). [<https://www.revistalideres.ec/lideres/grupo-guatemala-acciones-pronaca-empresa.html>]

El gran capital del agronegocio, con apoyo por parte del estado ecuatoriano, impulsó la modernización e industrialización de las estructuras productivas y la intensificación de la explotación de la tierra para mejorar los niveles de productividad, y promovió el uso intensivo de paquetes de ayuda agropecuaria y, en consecuencia, la mecanización del campo.

Con la NMP, las sociedades público-privadas prosperaron, e incorporaron compañías del agronegocio que controlaban la venta de semillas y químicos agrícolas en Ecuador. Por lo tanto, el gran capital del agronegocio, con apoyo por parte del estado ecuatoriano, impulsó la modernización e industrialización de las estructuras intensificación a través de la explotación de la tierra con el fin de mejorar los niveles de productividad y obligó al uso intensivo de kits agrícolas y la mecanización del campo.

La NMP no cuestionó ni modificó la estructura histórica del poder en el campo ecuatoriano, dado que no había políticas claras definidas en lo que respecta a redistribución. En su lugar, las economías campesinas fueron señaladas como la causa del retroceso en el sector de producción agrícola (Daza 2014). La transformación y redistribución en lo concerniente al campesinado fueron, entonces, omitidas en favor de un enfoque singular en el incremento de la productividad, mediante la promoción de un número reducido de productos agrícolas rentables para los agronegocios en las etapas previas y posteriores de la agricultura, en este caso, el maíz.



Los paquetes de ayuda agropecuaria no ofrecen la opción de usar semillas campesinas o autóctonas, ni la posibilidad de producción orgánica.

Se calcula cada kit para ser usado en una hectárea. El programa limita la venta a máximo 10 kits por agricultor.⁹

Para la venta y distribución de estos paquetes, el Estado hizo un trato con las cinco más importantes compañías distribuidoras de semillas en el país: Agripac, Pronaca, Ecuaquímica, Interoc y Del Monte, quienes son parte de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA). La dotación de paquetes de ayuda agropecuaria incluía la adquisición obligatoria de un Seguro Agrícola (que es parte del mismo programa), para proteger a los productores de las contingencias.

Los paquetes de ayuda agropecuaria no ofrecen la opción de usar semillas campesinas o autóctonas, ni la posibilidad de producción orgánica. El programa ignora los sistemas de semillas de los agricultores, más bien debilitándolos. Sin embargo, ha incluso marginalizado las semillas híbridas producidas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en favor de intereses corporativos (Gaibor, 2018). El INIAP es la única institución pública en el país que produce semillas certificadas; y en el contexto del Programa de Semillas, desarrolló cuatro variedades de semillas híbridas apropiadas para diferentes condiciones climáticas¹⁰. Aun cuando las semillas del INIAP generan menor producción por hectárea en comparación a las semillas importadas de la competencia,

En este escenario nació una entidad público-privada llamada Asociación de Productores de Semillas del Ecuador (ECUASEM), que engloba distribuidores y productores de semillas de Ecuador, el Instituto de Investigación Agrícola y la Agencia de Control de Calidad Agrícola (Agrocalidad). De este modo, ECUASEM constituye un grupo de iniciativa donde se discuten regulaciones alusivas a las semillas.

Una de las primeras acciones de esta alianza público-privada estuvo dirigida al suministro de paquetes de ayuda agropecuaria para campesinos a través del Plan Semillas o Programa de Semillas para cadenas agroalimentarias, orientados hacia la modernización del campo y enfocados en la promoción de semillas de arroz y maíz industrial. Mediante el Programa de Semillas, el Estado subsidió US\$214 del precio comercial de cada paquete de ayuda agropecuaria⁸.

⁸ En zonas de producción de maíz tales como Mocache o Ventanas, esto representó entre 11% y 16% del costo total de producción (Zambrano, 2016).

⁹ El Programa de Semillas promocionó tres tipos de paquete: paquetes de desempeño alto, medio y bajo. Los paquetes incluyen cuatro tipos de fertilizantes edáficos (suelo): un herbicida, un insecticida, un fungicida y un adyuvante en aerosol.

¹⁰ Las cuatro semillas híbridas: INIAP H-6001 para áreas secas en provincias costeras (Manabí); e INIAP H-551, INIAP H-553, e INIAP H-nuevo para áreas húmedas en provincias costeras (Los Ríos, la Cuenca baja y el centro de Guayas)

están mejor adaptadas a las condiciones climáticas y son más resistentes a las plagas y enfermedades locales, requiriendo así una menor cantidad de agroquímicos. A pesar de estas características, el Estado no ha promovido las semillas del INIAP a gran escala, prefiriendo subsidiar compañías privadas que proveen semillas importadas. Esta paradoja ilustra la presión que ejerce el agronegocio sobre instituciones estatales como el MAG.

Este es, por lo tanto, el contexto y estructura de intereses que definieron la promoción de la producción de maíz industrial en Ecuador. Como mostraremos en la siguiente sección, esta estructura es lo que parcialmente permitió que las crisis, como la crisis fitosanitaria del maíz, ocurrieran en primer lugar. A continuación, describimos las crisis que han venido golpeando al sector campesino, y cómo estas estructuras de interés apoyadas por las políticas estatales y que contribuyeron a la experiencia de estas crisis, también las usaron posteriormente para avanzar en su agenda.

Una crisis fitosanitaria de maíz

En 2016 tuvo lugar una crisis del maíz, debido a una enfermedad viral del mismo conocida como "Necrosis letal del maíz", la cual se introdujo en Ecuador debido a los controles fitosanitarios limitados dentro de las importaciones del estado. Esta enfermedad arrasó con cientos de hectáreas de maíz, lo cual afectó directamente a los campesinos, muchos de los cuales habían solicitado préstamos a BanEcuador¹¹ y otras instituciones financieras privadas.

Más de cincuenta mil familias fueron afectadas por esta enfermedad, la cual implicó una pérdida del 40% de la producción nacional (INEC 2016). Esto obligó a las organizaciones campesinas a solicitar al Estado una declaración de emergencia para el sector de producción de maíz en Ecuador. Según Luigin Barzola¹², la enfermedad viral afectó principalmente cultivos que usaban los paquetes de ayuda agropecuaria que contenían la semilla "Insignia 105", proveniente del distribuidor de semillas

11 Banco estatal que otorga préstamos para desarrollo agrícola

12 El líder campesino de la Asociación de Productores Agrícolas "San Jacinto", comunicación personal, (San Jacinto, marzo 2020).

Interoc. Irónicamente, esta fue la semilla con la mayor producción por hectárea en años previos, por lo cual fue la elección más evidente para el ciclo 2016.

Mariela Aminda, de la organización campesina FECAOL, explica lo que ocurrió durante las crisis de 2016 y 2017:

Las compañías nos venden semillas que son débiles y pobres... las semillas son preparadas usando químicos que posteriormente afectan el ecosistema... humanos, plantas y abejas... dentro de esos 4 meses durante los cuales se siembra el maíz, debemos incrementar nuestro uso de pesticidas. (Acción Ecológica, 2017).¹³

Además, los campesinos fueron exprimidos económicamente. Las compañías pasaron por alto los precios oficiales del maíz, los cuales se ubicaban, en esa oportunidad, en US\$15/cwt¹⁴. Los campesinos de Mochache aseveran que los compradores les ofrecían entre US\$7 y US\$8/cwt, porque las compañías dijeron que la calidad del maíz de estos campesinos era pobre, y no satisfacía las condiciones establecidas por el Estado en cuanto a humedad e impurezas. Como consecuencia, los campesinos cayeron en una espiral de deudas. Las organizaciones campesinas solicitaron al Estado renegociar su deuda y controlar la especulación de insumos. El Ministerio de Agricultura de ese entonces indicó que se solicitaría a las casas comerciales comprometerse durante esta crisis. Las industrias están obligadas a pagar el precio para mantener la producción de maíz".¹⁵ No obstante, esto no ocurrió, haciendo que el costo tanto de los riesgos económicos como ambientales en su totalidad recayeran sobre el campesinado. Por lo tanto, la crisis no solo implicó la necrosis que afectó a la producción de maíz, sino la consecuente crisis económica sufrida por los campesinos, ya que tuvieron que asumir la carga de las pérdidas, mientras las compañías continuaban recibiendo ganancias.

13 Testimonio tomado del Tribunal de Pueblos Fumigados, Quito, Ecuador, 30 de mayo de 2017

14 cwt = cien libras de peso (centena), lo que equivale a 45 kg aproximadamente

15 El vicepresidente de Ecuador pronunció un discurso ante la nación dos meses antes de la crisis del maíz de 2016, resaltando el logro de la "autosuficiencia" en la producción de maíz, como resultado de los programas de intervención estatal y la NMP (Daza, 2016).



La crisis fitosanitaria de 2017 fue el resultado del hallazgo del gusano del ejército de otoño o cogollero del maíz (*Spodoptera frugiperda*) y del gusano del ejército común u oruga defoliadora (*Mhytimna unipuncta*), que son resistentes a los insecticidas, en los paquetes de ayuda agropecuaria.

Debido a la pérdida total de la mayoría de las cosechas, los campesinos solicitaron la aplicación del seguro que fue comprado en conjunto con el paquete de ayuda agropecuaria, esperando recibir una compensación por el 60% de los daños. Esto tampoco ocurrió. La compañía de seguros alegó que los daños fueron causados por una

pobre administración técnica de los paquetes de ayuda agropecuaria por parte de los campesinos y que, por lo tanto, la compañía no era responsable del pago¹⁶. La decepción de los campesinos con respecto al seguro fue tan grande, que en 2019 sólo el 42% aseguró su cultivo (MAG, 2019).

Esta deuda contraída en 2016 por los productores de maíz permanece impagada, en especial debido a que se produjo una nueva crisis fitosanitaria en 2017. Algunos campesinos se han visto forzados a vender sus terrenos o a solicitar nuevos créditos, en algunas ocasiones a través de préstamos informales, “tapando un hueco con otro hueco”¹⁷.

La crisis fitosanitaria de 2017 fue el resultado del hallazgo del gusano del ejército de otoño o cogollero del maíz (*Spodoptera frugiperda*) y del gusano del ejército común u oruga defoliadora (*Mhytimna unipuncta*), que son resistentes a los insecticidas, en los paquetes de ayuda agropecuaria. Con el fin de abordar esta crisis, se fomentó la utilización de insecticidas de elevada toxicidad como la cipermetrina, lo cual incrementó el costo de los paquetes de ayuda agropecuaria. El grado de toxicidad dentro de los campos de maíz aumentó como consecuencia de la fumigación la tierra, llevada a cabo por el Estado. Aunque también fue sugerida la fumigación aérea, esta propuesta no fue acogida.

Por consiguiente, la probabilidad de que los campesinos experimentasen crisis aumentó por causa de los paquetes de ayuda agropecuaria y la política estatal que reflejaban, y se hizo que los campesinos pagaran también por dichas situaciones. La crisis del maíz debida a las infestaciones de plagas también propició un panorama justificativo para situaciones similares, a modo de exhortación a la utilización de maíz genéticamente modificado como solución a esta problemática. Esto se asemeja al caso del gusano del ejército de otoño en África, que ha reforzado las voces de quienes promueven los transgénicos que, en esencia, piden más del mismo sistema que originó la crisis en primera instancia, en lugar de ocuparse de los desbalances ecológicos fundamentales.

16 Luigin Barzola, líder campesino de la Asociación de Productores Agrícolas “San Jacinto”, comunicación personal, (FIAN Ecuador, 2020).

17 Luigin Barzola, líder campesino de la Asociación de Productores Agrícolas “San Jacinto”, comunicación personal, (FIAN Ecuador, 2020).

El terremoto de 2016

Un terremoto de 7,8 grados de intensidad sacudió la provincia de Manabí, una zona agrícola campesina, el 16 de abril de 2016. Este movimiento sísmico afectó fundamentalmente a las poblaciones urbanas, pero también repercutió gravemente en el campo. Con base en el censo poblacional de 2016 y las evaluaciones preliminares, se calcula que el 13% de la población de Esmeraldas y Manabí fue perjudicada por el terremoto (Bravo, 2018).

Catástrofes como el mencionado terremoto generan la posibilidad de implementar políticas que no serían posibles de otro modo (Wisner et al. 2003) luego de tales catástrofes, existiendo dos posibles escenarios diferentes: podría imperar la agricultura industrial, como ocurrió en las regiones costeras del centro y el sur, con el pretexto de la reconstrucción y la necesidad de impulsar el desarrollo de la región; o bien podría aprovecharse la oportunidad para reactivar y fortalecer la economía campesina, basada en una modalidad de producción más sustentable, donde se recupere la esencia de la vida y las comunidades. Por desgracia, en el caso que estamos analizando, fue promovida la agricultura industrial; el fenómeno natural del terremoto fue usado por el gobierno para inducir agresivamente una expansión más amplia del maíz destinado a la industria avícola.

De acuerdo con información oficial, los rubros más afectados fueron la agricultura, la pesca y el comercio. El terremoto impactó, entre otros aspectos, la infraestructura de los puertos pesqueros públicos; los centros de recolección de café, arroz, leche, cacao y granos, los molinos de piensos y la avicultura y la ganadería porcina. Se estimó una pérdida de más de 362.000 toneladas de productos agrícolas y que 542.000 habitantes rurales se hallaban en un área severamente afectada. No se proporcionó información respecto a los efectos del terremoto sobre los pequeños agricultores, pero se calculó que 692 000 hectáreas de tierras agrícolas fueron impactadas (El Telégrafo, 2016). Las encuestas efectuadas en algunas zonas rurales perjudicadas por el terremoto determinaron que los campesinos atravesaron una serie de problemas luego del terremoto, empezando por la dificultad de llegar a sus tierras agrícolas luego de ser evacuados (Bravo, 2018).

El gobierno asignó el 5.12% de la totalidad del presupuesto al sector productivo para enfrentar la contingencia. Entre los procedimientos de emergencia, el gobierno reforzó la distribución de paquetes de ayuda agropecuaria de arroz y maíz a los campesinos locales de las áreas afectadas (Bravo, 2018). De acuerdo con el líder de una organización campesina que recolectaba paquetes de ayuda agropecuaria, “los funcionarios del Ministerio de Agricultura estaban continuamente presentes durante la entrega de los paquetes de ayuda agropecuaria, en compañía de los miembros del personal de Agripac¹⁸. Los 1.500 kits recibidos por mi organización para distribuir a los grupos de campesinos contenían semillas de maíz o de arroz (dependiendo de la zona), fertilizantes (urea) y una mezcla de varios agroquímicos. que ellos denominan *líquido*”¹⁹.

El Estado subsidió dos tercios del precio total del paquete de ayuda agrícola a los habitantes rurales que resultaron afectados por el terremoto de Manabí. El gasto restante fue cubierto por los campesinos, lo que benefició directamente a empresas como Agripac. La política de entrega de paquetes de ayuda agropecuaria de manera posterior al terremoto despertó la preocupación por el abandono de la producción campesina diversificada en la provincia de Manabí. Como fue explicado por un líder campesino:

Tenemos ahora un subsidio importante para el arroz y el maíz, pero no son nuestras variedades de maíz campesino. Además, una gran variedad de semillas diferentes está desapareciendo para otros cultivos.²⁰

Numerosos bosques autóctonos (bosques tropicales secos) y cultivos tradicionales se transformaron en monocultivo de maíz. Manabí, así como Santa Elena, es un centro de origen de diferentes cultivos; es el lugar donde se han recogido las pruebas de fitomejoramiento más antiguas en el continente americano (Piperno, 2011).

18 El más grande distribuidor de insumos agrícolas en el país-

19 Este testimonio fue dado por un líder campesino cuya organización recolectó paquetes de ayuda agropecuaria en marzo de 2017. Solicitó que no fuese revelado su nombre. Citado en Bravo (2018).

20 Ibid.

La crisis del terremoto fue usada para ampliar las políticas agrícolas de industrialización de la producción de monocultivos las cuales

Por lo tanto, la crisis del terremoto fue usada para ampliar las políticas agrícolas de industrialización de la producción de monocultivos las cuales, en lugar de servir como medida temporal para ayudar a los campesinos a producir luego de la contingencia, más bien los condujo a la dependencia de las cadenas de valor del agronegocio, que continuaron extrayendo valor económico del sector campesino.

El regreso al neoliberalismo: La gran Minga Agropecuaria

La Gran Minga Agropecuaria²¹ es un programa gubernamental implementado desde 2017, el mismo año en el que el presidente Lenin Moreno asumió el poder. Su administración se conoce como una regresión neoliberal con una fuerte presencia corporativa dentro del estado, incluyendo la política agraria. Por medio de la GMA, el Estado expandió la presencia del agronegocio dentro del régimen alimentario del país, consolidando su participación en el proceso de toma de decisiones en cuanto a patrones de consumo y en producción, procesamiento y mercadeo agrícola. También hicieron posible la inclusión de nuevas tecnologías, incluyendo el uso constitucionalmente prohibido de transgénicos.

La GMA también propone la integración de productores a pequeña y mediana escala en la agricultura industrial corporativa lo cual, supuestamente, garantiza el acceso a los mercados a los pequeños y medianos productores. Sin embargo, en efecto, están rindiendo su soberanía alimentaria a las élites locales y corporaciones transnacionales, debido a que sólo las cadenas de valor más importantes son priorizadas, como la cadena de valor de maíz-aves de corral (Recalde and León, 2020).

²¹ Minga o "minka" en Kichwa, es una palabra que proviene de la tradición indígena de trabajo compartido o trabajo comunal.

Los objetivos de la GMA incluyen la concesión de títulos de propiedad a los productores que obtengan créditos, irrigación, paquetes de ayuda agropecuaria que contengan semillas y agroquímicos, y seguro agrícola y ganadero, asistencia técnica, mecanización agrícola y acceso a los mercados. El objetivo principal de la GMA es otorgar un millón de paquetes de ayuda agropecuaria subsidiados a productores que posean 10 hectáreas o menos, enfocándose principalmente en la producción de arroz y maíz híbrido. Los paquetes de ayuda agropecuaria de alto rendimiento contienen los mismos materiales que el Programa de Semillas: semillas certificadas, fertilizantes edáficos (suelo) y agroquímicos.

Las diferencias entre la GMA y el Programa de Semillas se relacionan con la consolidación de la presencia y el control de ECUASEM en los territorios productores de maíz. En la GMA, el número de compañías que venden paquetes incrementó. De modo que, en adición a las cinco grandes compañías que ya estaban involucradas (Agripac, Pronaca, Ecuquímica, Del Monte e Interoc), otras, como Crystal Chemical, El Agro, Fertisa, Farmagro, Solagro y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA E.P.), fueron incorporadas²². Por lo tanto, el programa ha sido intensificado, anexando más compañías privadas a la bonanza de abastecerse económicamente del sector campesino.

En el caso del maíz industrial, según el MAG (2019), solo el 40% de los productores son beneficiarios, el resto debe ser su propio proveedor, siendo contratados por compañías o comprando paquetes de ayuda agropecuaria de manera individual.

Cuando los productores están calificados para acceder a los paquetes de ayuda agropecuaria, deben pagar una parte del costo total. El valor de mercado del paquete asciende a 537 dólares por hectárea. El agricultor paga 357 dólares. Este incentivo es financiado a través de créditos del banco estatal BanEcuador o por medio de instituciones bancarias privadas, quienes transfieren el dinero de manera directa a las compañías que proveen los paquetes.

²² UNA E.P. es una empresa pública a cargo de la adquisición, almacenamiento, distribución y exportación de alimentos agrícolas y procesados por parte de productores medianos y pequeños; así como la importación y distribución de fertilizantes e insumos para productores a lo largo del país. Es la única compañía estatal que participa en la GMA en lo referente a paquetes de ayuda agropecuaria. Actualmente, dados los nuevos recortes en el presupuesto que han sido justificados debido a la crisis del COVID-19, esta compañía está atravesando un proceso de liquidación.

Un paquete de ayuda agropecuaria convencional contiene:

Tabla 1: Contenido de un paquete de ayuda agropecuaria de maíz

Artículo	Producto	Precio final en US\$
Semillas	Semillas DAS 3383	175.00
Fertilización edáfica (suelo)	Urea	99.50
	Cloruro de potasio	23.00
	Fertimix	29.00
	Sulfato de magnesio	17.30
	DAP (Fosfato diamónico)	30.00
Adyuvantes en aerosol	Propulsor	2.33
Control de maleza	Metsulfuron	5.55
Control de plagas de insectos	Serafin (Imidacloprid)	9.00
	Carbin (Thiodicarb)	8.30
Control de enfermedades	Authority (Oxystrobin 125 + flutriafol 12)	27.22
Precio total del paquete de ayuda agrícola sin descuento		439.02
Precio total del paquete de ayuda agrícola con descuento		426.20
Descuento total		12.82
Subsidio/hectárea		180.00

Fuente: MAG (2019)

Políticas relacionadas a las semillas durante la pandemia de COVID-19

En respuesta a la crisis de COVID-19 y sus efectos proyectados, el estado intentó aplicar medidas que podrían, por sí mismas, generar otras dificultades a los sectores agrícola y campesino. El 18 de mayo de 2020, el director ejecutivo de Agrocalidad emitió la Resolución 0063 como una medida temporal durante la emergencia de COVID-19. El objetivo era “permitir la importación de frutas y vegetales para consumo y/o procesamiento que no satisfagan los requisitos fitosanitarios de importación”. La Autoridad Agraria Nacional justificó esto a petición del secretariado de comercialización debido a la necesidad emergente de importar frutas y vegetales a causa de la escasez en el país. Estas medidas serían aplicables hasta que la Organización Mundial de la Salud declare que el mundo ha superado la emergencia pandémica.

Para las organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores, permitir las importaciones de productos vegetales o semillas que no cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la ley podría exponer a los cultivos ecuatorianos a plagas y enfermedades.

Simultáneamente, Agrocalidad y el MAG comunicaron a través de las redes sociales que esta decisión para “importaciones emergentes, referida exclusivamente a semillas y material genético, asegura su disponibilidad para el nuevo ciclo de siembra” (Colectivo Ecuador Libre de Transgénicos, 2020).²³

Para las organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores, permitir las importaciones de productos vegetales o semillas que no cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la ley podría exponer a los cultivos ecuatorianos a plagas y enfermedades. Constituiría, por lo tanto, una amenaza a la diversidad agrícola y los ecosistemas naturales a mediano y largo plazo.

En vista de las preocupaciones manifestadas por las organizaciones sociales y campesinas, el 21 de mayo de 2020, Agrocalidad emitió la Resolución 0071, que abolió la Resolución previa.

Un peligro aún más significativo representaría la introducción de semillas transgénicas que han sido prohibidas por la constitución de Ecuador. Flexibilizar los protocolos fitosanitarios y de seguridad alimentaria de frutas y vegetales propicia el surgimiento de dudas en cuanto al origen y la calidad de los alimentos. Esto atenta contra el derecho humano a una alimentación y adecuada y culturalmente apropiada, contemplado como mandato constitucional en el Artículo 28, en lo que respecta a soberanía alimentaria.

Las organizaciones sociales señalan lo siguiente:

priorizar las importaciones de ciertos productos y flexibilizar sus requisitos fitosanitarios bajo la suposición de escasez local sin un respaldo técnico para este reclamo es contradictorio a lo que el propio MAG ha declarado. El MAG ha expresado su interés en implementar una estrategia para fortalecer el sector agrícola para reactivar la economía del país. Importar alimentos sin un fundamento técnico y la participación de actores sociales y productores, debilita la producción y comercialización de la agricultura familiar local. Por Esto nos oponemos a estas medidas, que solo favorecerían a un pequeño sector corporativo vinculado a las importaciones (FIAN Ecuador, et al., 2020).

En consecuencia, el sistema alimentario ecuatoriano debe ser defendido por los movimientos progresistas, no sólo contra contingencias como la pandemia de COVID-19, sino también contra el sistema que la política estatal seguiría creando si no se le opone resistencia.

De acuerdo con el artículo 401 de la constitución, Ecuador es un país libre de semillas y cultivos genéticamente modificados. Pese a esto, se abrió la posibilidad de introducir cultivos genéticamente modificados cuando el ex presidente lo proclamó como un asunto de interés nacional. Esto fue aprobado posteriormente por la Asamblea Nacional en 2008.

La política pública como una puerta de acceso a las semillas genéticamente modificadas

En adición a estas contingencias y el empuje continuo para industrializar al sector campesino en aras del agronegocio, existe una presión creciente para permitir la entrada y producción de cultivos genéticamente modificados en el país. De acuerdo con el artículo 401 de la constitución, Ecuador es un país libre de semillas y cultivos genéticamente modificados. Pese a esto, se abrió la posibilidad de introducir

23 Citado en Fundación ALDEA (2020).



cultivos genéticamente modificados cuando el ex presidente lo proclamó como un asunto de interés nacional. Esto fue aprobado posteriormente por la Asamblea Nacional en 2008. Desde entonces, ha habido varios intentos de introducir semillas genéticamente modificadas en el país, por ejemplo, la NMP contempló la posibilidad de introducir semillas de soya y canola genéticamente modificadas.

Sin embargo, en 2018, se confirmó la presencia de soya genéticamente modificada en algunas plantaciones, lo cual se atribuye a la falta de control estatal sobre las semillas que entran al país y la ausencia de control en áreas agrícolas.

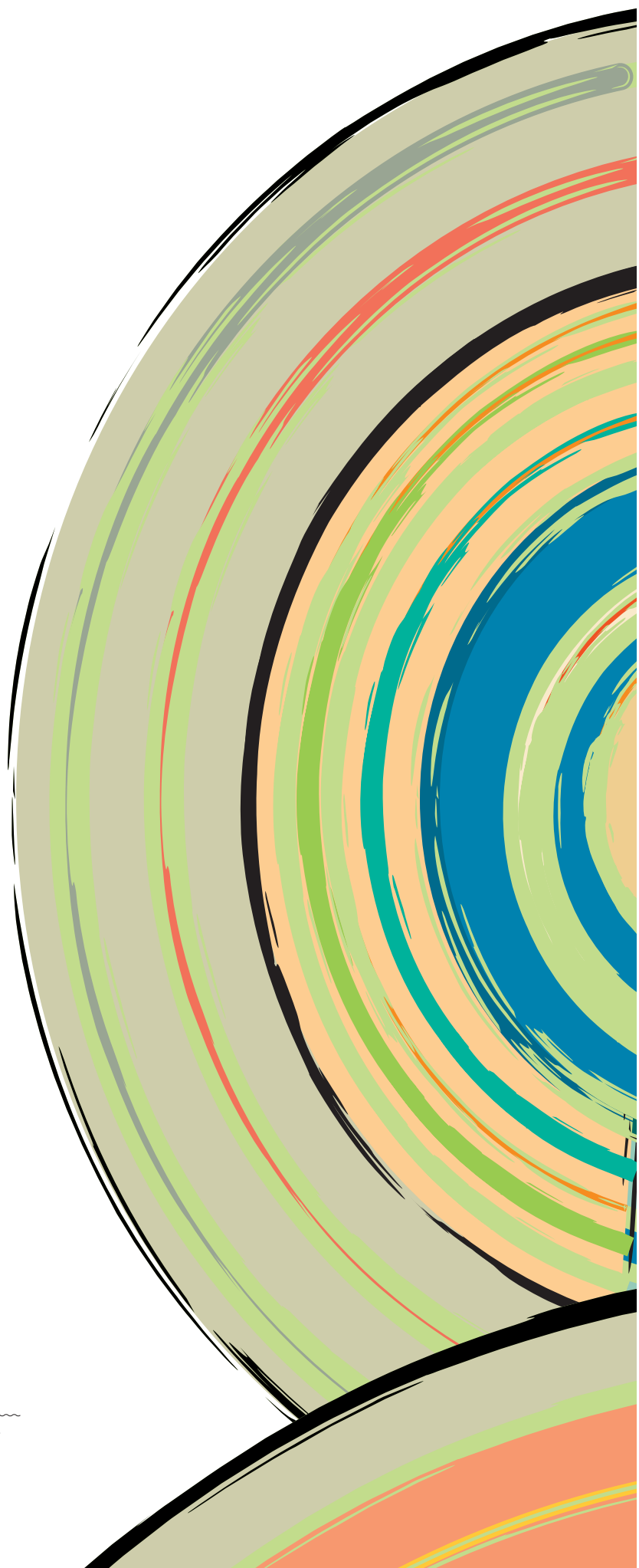
Luego de aprobada la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable en 2017, (comúnmente conocida como la Ley de Semillas), se permitió la introducción de transgénicos para *finés experimentales*. Esto abrió una ventana para la comercialización de organismos transgénicos en Ecuador, una disposición que fue objetada en la Corte Constitucional, bajo premisa de ser inconstitucional por al menos 6 razones. La objeción fue presentada por diferentes organizaciones sociales del país, como la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la Confederación de la Nación Kichwa del Ecuador (Ecuarrunari), Acción Ecológica, la Red de Guarda Semillas, la Federación de Centros Agrícolas del Litoral (FECAOL), entre otras, que aún están pendientes (La Hora, 2018).

De igual manera, fueron manifestadas muchas preocupaciones por parte de los colectivos campesinos, ecologistas y agroecológicos del país a causa de la presión que ECUASEM está aplicando para que los cultivos transgénicos se incorporen en Ecuador. Esto condujo a las organizaciones de la sociedad civil a monitorear sistemáticamente la presencia de cultivos ilegales genéticamente modificados en el país. En el caso del maíz, aún no ha habido evidencia de la introducción de semillas ilegales genéticamente

modificadas. Sin embargo, en 2018, se confirmó la presencia de soya genéticamente modificada en algunas plantaciones, lo cual se atribuye a la falta de control estatal sobre las semillas que entran al país y la ausencia de control en áreas agrícolas.

Dos organizaciones campesinas locales, en coordinación con el Defensor del Pueblo, presentaron una Acción de Inconstitucionalidad citando la presencia de estos organismos genéticamente modificados. La Corte falló en favor del campesinado, sentando un precedente importante para el país. No obstante, el Ministerio de Agricultura aún debe cumplir con el fallo y realizar su función de control²⁴.

Dicho eso, por medio de los paquetes de ayuda agropecuaria, cualquier compañía podría introducir fácilmente semillas de maíz genéticamente modificado al país simplemente incluyéndolas dentro del empaque, sin el conocimiento de los productores campesinos. Claramente, los empaques no sólo implican el avance de la agricultura industrial en áreas del agronegocio; también podrían volverse caballos de Troya para la entrada de organismos genéticamente modificados en el sector agrícola.



²⁴ Unidad Judicial Penal Con Sede En El Cantón Quevedo. (2019). Juicio No: 12283201802414, Primera Instancia.

Choques múltiples, política e interés corporativo

Como hemos ilustrado en la figura 2, en la implementación de un modelo en el cual el Estado y las compañías emplean escenarios de crisis para promover los intereses corporativos, incrementar las ganancias corporativas y perjudicar al campesinado en su beneficio, se originan grandes ganadores y grandes perdedores.



Figura 2: Beneficiarios y perdedores del modelo de múltiples crisis

Toda la cadena de valor está diseñada para cubrir las necesidades de las compañías que controlan y se sirven de la cadena de valor de maíz-aves de corral, así como de los grandes importadores. Los precios son aceptados por los campesinos, mientras que las empresas integran a los campesinos que poseen tierras y a los que no en la cadena de producción de maíz, externalizando los costos a los campesinos. La biodiversidad es, de igual manera, una víctima de este sistema.

La figura 3 sintetiza los diferentes implicados en este sistema y la forma en que se benefician. Se pueden encontrar más detalles sobre las compañías involucradas en el Anexo 1.

Expansión de la frontera del agronegocio sobre los ecosistemas naturales

Las políticas centradas en la expansión de la frontera agrícola a lo largo de la costa de Ecuador (especialmente en lo que respecta al maíz industrial, para suplir la cadena de valor de aves de corral) han impulsado el reemplazo de los cultivos destinados al consumo local, y la ocupación de los ecosistemas naturales. Se han desarrollado varios programas para promover los monocultivos de maíz en sectores específicos.

El programa del Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola Ambiental y Social de forma Sostenible en el Ecuador (PIDAASE) está enmarcado dentro de esta propuesta. Tiene como objetivo

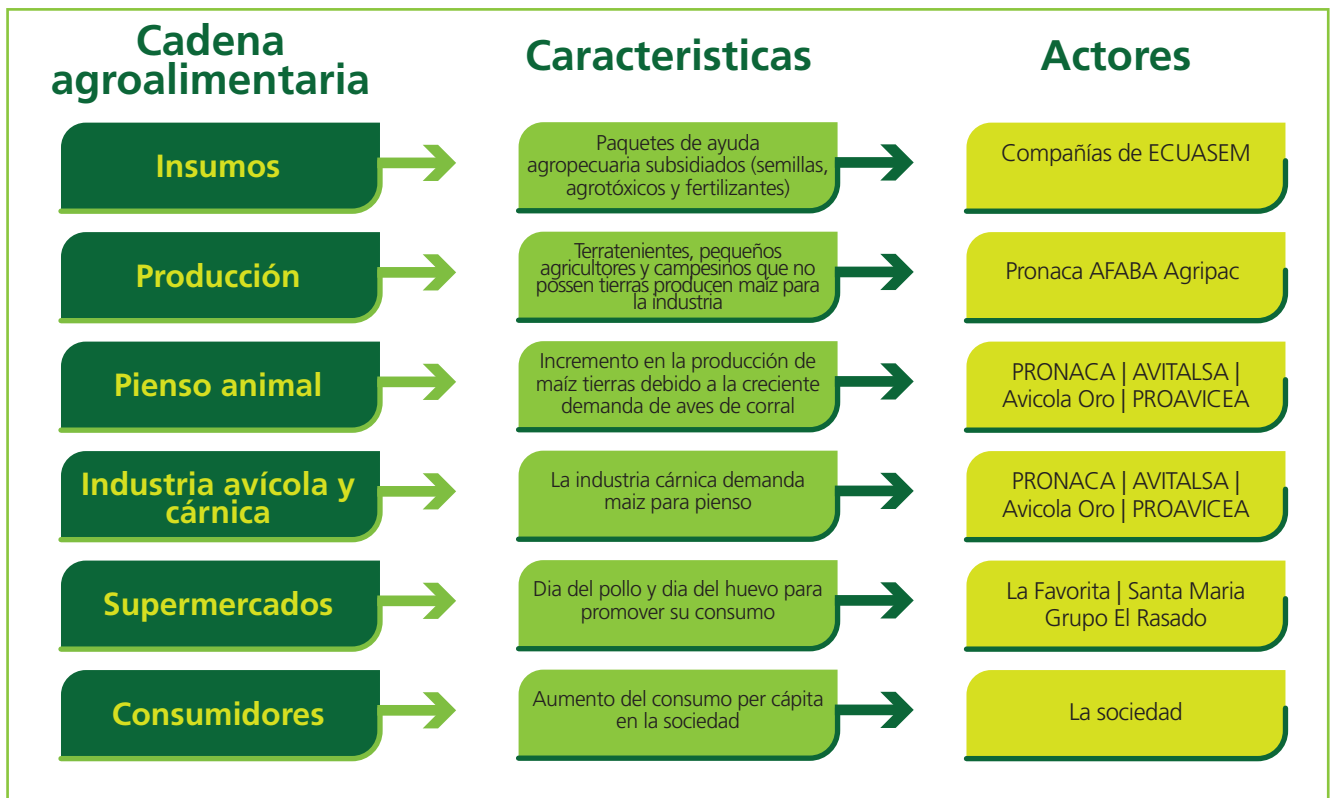


Figura 3: Actores en la cadena agroalimentaria

implementar sistemas integrales de producción agrícola en 10000 hectáreas en años próximos, usando tecnología moderna y sustentable en tierras comunales dentro de la Península de Santa Elena²⁵. En esta área existen ecosistemas de bosques secos y semiáridos que aún no han sido amenazados de manera agresiva por la agricultura industrial, debido a la ausencia de agua. Sin embargo, durante los últimos años, se ha construido un sistema de diversificación de agua desde la cuenca para beneficiar al agronegocio. La Península de Santa Elena tiene un importante potencial para alcanzar la soberanía alimentaria local a través de la producción agroecológica. Pero, en lugar de ello, la tendencia es a optar por la producción industrial.

Los ecosistemas secos, como el de la Península de Santa Elena, están adaptados a las fluctuaciones climáticas caracterizadas por veranos secos e inviernos lluviosos. Son importantes desde la perspectiva ecológica ya que, a diferencia de otros bosques secos presentes en América Latina, estos son los únicos que se desarrollan alrededor del ecuador. Esta zona, llamada Región Tumbesina,

es el hogar de especies endémicas (plantas y pájaros), muchas de las cuales se encuentran bajo amenaza de extinción (Best and Kessler, 1995).

El territorio tradicional de las Comunas Ancestrales de Santa Elena pertenece a pueblos indígenas que se encuentran en proceso de reconstruir su identidad, perdida durante los muchos años de colonización y saqueo de sus territorios, aunque pertenecen a los asentamientos humanos continuos más antiguos en Ecuador. Son, principalmente, pescadores; y durante la temporada lluviosa practican la agricultura tradicional (Álvarez, 2001). Muchos miembros de la comunidad se sienten atraídos por la posibilidad de producir maíz. Mientras desarrollan proyectos de producción para cercenar los lazos de dependencia de los intermediarios²⁶, se integrarán de manera vertical a través de dichos proyectos a la industria avícola.

Manabí es otra área de bosque seco tropical en la que se ha expandido la producción de maíz gracias a las medidas de emergencia implementadas luego del terremoto de 2016.

25 <https://www.agricultura.gob.ec/pidaasse/>

26 Homero de la Cruz, líder de la Comuna de Valdivia, comunicación personal, enero de 2020. Comuna de Valdivia.



Esta es una provincia fundamentalmente campesina, donde el cultivo se centra, tradicionalmente, en maíz nativo, asociado con frijoles, calabazas y otros vegetales, árboles frutales (naranja y lima), plátano, yuca y la cría de animales pequeños.

Los impactos ambientales de la producción de maíz en Manabí son muy graves, debido a que el modelo de agronegocio amerita una gran cantidad de agrotóxicos y mecanización, generando erosión y pérdida de la fertilidad de los suelos, impactando así en la biodiversidad, degradando los recursos naturales y contaminando las fuentes de agua y la atmósfera (Gaibor, 2018). Alfredo Carriel señala, “En muchas ocasiones, el ingreso de los campesinos es muy pequeño, más aún si tomamos en cuenta lo que se pierde en términos de suelo y calidad del agua, las consecuencias ambientales y la salud de nuestra familia²⁷”.



²⁷ Alfredo Carriel, líder campesino de Mocache y ex presidente del centro Agrícola del Distrito de Quevedo, comunicación personal, [Quevedo, 16 de abril de 2020]

La promoción de paquetes de ayuda agropecuaria genera una serie de impactos en la agricultura campesina y los pequeños productores, incluyendo su realidad socioeconómica y sus sistemas de producción y salud, además de la agrobiodiversidad y el ambiente.

Adicionalmente, existe una pérdida de especies asociada con el modelo de agricultura diversificada. Entre ellas se encuentran plantas y animales que no están destinados a ser consumidos como alimentos, pero tienen usos medicinales o rituales, o plantas que sirven como alimento para otras especies. Esto cuestiona la responsabilidad del estado de garantizar “la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas” (Constitución de Ecuador, Artículo 281, numeral 6). Los elementos progresistas de la Constitución, y los Derechos de la Naturaleza igualmente consagrados por ella, están siendo violados por la determinación del estado de hacer prevalecer los intereses del agronegocio en Ecuador.

Los campesinos pagan el precio, mientras el agronegocio se ríe durante todo el camino hasta el banco

La promoción de paquetes de ayuda agropecuaria genera una serie de impactos en la agricultura campesina y los pequeños productores, incluyendo su realidad socioeconómica y sus sistemas de producción

y salud, además de la agrobiodiversidad y el ambiente. Algunos de estos aspectos son analizados a continuación.

Impactos socioeconómicos

- Se reducen las opciones para la diversificación de cultivos.
- Se desarrolla dependencia hacia los paquetes tecnológicos, asistencia técnica de compañías y mercados de contrato.
- Las elevadas deudas prácticamente hacen de los campesinos trabajadores subcontratados sin beneficios de seguridad social de ninguna clase²⁸.
- Los agricultores son aceptores de precios, por lo que venden su cosecha a costos no competitivos, algunas veces por debajo del punto de equilibrio (US\$15).²⁹
- Los agricultores asumen todos los riesgos, incluyendo los posibles gastos necesarios relacionados con la mano de obra. Si el agricultor no puede costear la contratación de trabajadores, la producción puede disminuir, haciendo imposible saldar las deudas.
- Los campesinos asumen los costos de riesgos tales como plagas o enfermedades, sequías o inundaciones (que son comunes en áreas productoras de maíz de Ecuador).
- Pérdida de agrobiodiversidad y competencias correspondientes.

Debido a todos estos factores, hay años en los que los campesinos no pueden incluso cubrir los costos de producción y, por lo tanto, no pueden pagar las deudas, conduciendo a un círculo vicioso de endeudamiento (León and Yumbala, 2010).

En lo que respecta a la entrega de los paquetes, el líder campesino Luigin Barzola expresa³⁰:

28 Carmen Cevallos, mujer campesina de Manabí, parte de la organización Asociación de Mujeres Comunitarias del Canton Tosagua (AMUCOMT), comunicación personal, 24 de abril de 2020, Tosagua – Manabí.

29 Al 2020, el precio por centena (cwt) ha sido reducido a US\$14.60, comparado al precio establecido para 2019, que se aproximaba a US\$15.25. La industria, de hecho, solicitó una reducción mayor, a un precio cercano a US\$13.21.

30 Luigin Barzola, líder campesino de la Asociación de Productores Agrícolas “San Jacinto”, comunicación personal, citado en FIAN Ecuador (2020).

La gente se endeudó porque quería esa semilla. Era fácil obtener crédito de BanEcuador o la banca privada, donde un ejército de ingenieros corporativos ayudaba a justificar la aprobación de créditos. Algunas veces, estos créditos se aprobaban sólo por mostrar un contrato de renta, porque la oficina de créditos para productores era amigable durante esa época.

Este testimonio fue corroborado por Carmen Cevallos, para quien “los paquetes de ayuda agropecuaria son un medio para esclavizarnos al agronegocio y que seamos explotados siempre”.³¹

Los campesinos de Cuenca de Rocafuerte en la provincia de Manabí sienten que el paquete de ayuda agrícola los ata a las compañías que los distribuyen; el estado paga por un porcentaje del paquete y ellos deben pagar por el resto. De este modo, el estado y los campesinos pagan para enriquecer a las compañías.

Impactos en la salud

Los campesinos también pagan por los paquetes con su salud. Con el uso de pesticidas, los agricultores corren el riesgo de enfermarse ellos o a su familia y vecinos. De acuerdo con el testimonio de Ufredo Carriel³²:

Había prácticamente todo, algunos rociaron justo a tiempo, pero la toxicidad se volvió peligrosa. La gente estaba enfermándose con los pesticidas, alegaron que preferían salvar sus vidas y, si la producción se perdía... tendrían que aceptarlo. Confiraron en que las aseguradoras atenderían la crisis. Hubo otros que rociaron incluso en los campos afectados, los cuales ya estaban arruinados, y no podía hacerse nada al respecto.

En 2017, aproximadamente 10 miembros de la comunidad de Balzar, otra importante área de producción de maíz, sufrió efectos tóxicos debido al uso agresivo de pesticidas para el control de plagas y enfermedades (Reys y Paucar, 2017). El mismo año, en Paján, los

31 Carmen Cevallos, mujer campesina de Manabí, parte de la organización Asociación de Mujeres Comunitarias del Canton Tosagua (AMUCOMT), entrevista, Tosagua - Manabí, 24 de abril de 2020.

32 Ufredo Carriel, líder campesino de Mocache y ex presidente del centro Agrícola del Distrito de Quevedo, entrevista, Quevedo 16 de abril de 2020.

centros de salud recibieron a 60 personas que habían sido envenenadas o presentaban problemas relacionados con la inhalación de pesticidas dentro de un lapso de 30 días (El Universo, 2017).

La única acción preventiva tomada en materia de salud para los productores contratados por Pronaca fue el suministro de máscaras protectoras a los pequeños productores para el manejo de agroquímicos (Gaibor, 2018). Los pequeños productores manifiestan estar al tanto de los riesgos representados por el uso de agroquímicos para la salud de las familias, pero son presionados para continuar usándolos. Como expresan:

Por supuesto, la salud en sí misma te afecta. *Random*³³ es bastante perjudicial, nos enseñan a caminar con esos líquidos que dañan. El suelo en sí mismo se daña por tanto glifosato, pero aun así tienes que usarlo porque no hay nada más. Hace dos años PROLOCAL nos dio una máscara, pero sabes que puede dañarse, pero no queda más que seguir trabajando (citado en Gaibor, 2018: 205).

Aunque el impacto del modelo industrial de producción de alimentos en la salud ha sido documentado durante años en un contexto más amplio, se requieren más estudios sanitarios acerca de los efectos de este modelo tecnológico tóxico sobre la salud de los agricultores en Ecuador, en particular.

La cooptación, el feudalismo del agronegocio y la monopolización de territorios campesinos

Con el fin de apoyar los intereses, como la promoción de la modernización agraria, y la agenda del régimen de la Revolución Ciudadana, se crearon varias organizaciones sociales tras el inicio del mismo. Las organizaciones sociales ya existentes, en otros casos, fueron cooptadas. En todo caso, las organizaciones que mediaron entre el Estado y las comunidades para la entrega de diversos tipos de subsidios, como los paquetes de ayuda agropecuaria, fueron las que se fortalecieron durante este período. Las compañías que reparten paquetes de ayuda agropecuaria subsidiados figuran en este contexto, el cual fue intensificado y consolidado a través de los programas de reconstrucción post-terremoto.

33 Random es el nombre comercial de un herbicida.

Este es el testimonio de una líder femenina del área:³⁴

En Tosagua³⁵ existe un gran centro de recolección de granos de maíz, donde sólo se acepta un tipo específico de maíz. El paquete es distribuido por el MAG. Nosotras, las mujeres, nos declaramos en rebelión contra las políticas del MAG, porque no queremos integrarnos con Agripac o Ecuaquímica, porque imponen paquetes de ayuda agropecuaria que no nos favorecen. Esto causó un gran descontento entre los técnicos agrícolas del MAG. (Bravo, 2018)

Con la presencia de intermediarios, la situación se vuelve incluso más perjudicial para los campesinos. Las compañías, por otro lado, aseguran el acceso a la materia prima y, mediante el control de grandes volúmenes de producción, también pueden controlar el precio de la mercancía.

Como asevera Kay (2001), el agronegocio pretende controlar al sector agrícola, con la finalidad de transformar a los campesinos en productores altamente dependientes mediante contratos agrícolas, lo cual equivale a potenciar un proceso de proletarización del campesinado. Según Teubal (1995), esto produciría un proceso de expropiación de tierras, o "feudalismo del agronegocio". Desde un punto de vista geográfico crítico, esto implica la creación de territorios campesinos monopolizados por el agronegocio.

El sistema, por lo tanto, no solo incluye el control corporativo de partes de la cadena de valor, sino el control de territorios, semillas, precios de insumos agrícolas y la mercancía, incluso el control del mercado y patrones de consumo. Es evidente, a partir de estos testimonios, que: el Estado usa las organizaciones campesinas como entre compañías y campesinos; las compañías son el beneficiario primario y las compañías tienen la autoridad de imponer que variedades de semillas se ofrecen en el mercado.

34 Citado en Bravo (2018).

35 Tosagua es el área con la mayor producción de maíz en la provincia de Manabí.

Nuestra visión de futuro

La realidad enfrentada por los agricultores de maíz industrial es tan dura y compleja que se dificulta hacer propuestas para el futuro. Los productores están atrapados dentro del sistema actual en diferentes maneras, incluyendo la dependencia de la cadena de valor de maíz-aves de corral, el poder de las compañías dominantes y sus sistemas subsidiados, los endeudamientos y la debilidad de la organización y solidaridad de los agricultores.

Debe concebirse un programa de transición en etapas, empezando con una transición a través de la cual el estado hace un cambio gradual en el contenido de los kits de ayuda agrícola, favoreciendo a los insumos producidos por cooperativas productoras pequeñas y medianas, abandonando los pesticidas más peligrosos y alcanzando, en última instancia, una migración basada primero en productos orgánicos, y luego en productos agroecológicos. Es esencial que el estado también apoye la producción campesina de semillas para surtir a sus socios, prefiriendo semillas autóctonas. Apoyar los derechos de los agricultores y los sistemas de semillas es, entonces, un elemento crucial de la transición necesaria.

A través de políticas públicas, debe promocionarse la cría de pollos controlada por pequeños productores. Los campesinos deben producir el alimento animal, y el intercambio comercial debe hacerse bajo términos justos y solidarios. El control de la producción de maíz para piensos y otros productos procesados mejorará los ingresos de los agricultores. Las fuentes de alimento animal también deben ser diversificadas, como una parte complementaria de la producción de alimentos para la población.

Para cesar la dependencia de los supermercados, los campesinos deben colocar sus productos en mercados de campesinos,

en los cuales existen mejores condiciones de intercambio tanto para productores como consumidores. Esto debe complementarse con una campaña de concientización para los consumidores, con la finalidad de que prefieran consumir producción campesina. Idealmente, estas fincas campesinas podrán recuperar la soberanía alimentaria local y familiar, y podrán vender sus excedentes sin sacrificar su autosuficiencia. Para esto, necesitan diversificar sus cultivos. En otras palabras, los sistemas alimentarios necesitan ser replanteados dentro de una red de vida campesina.

Pero ninguna de estas utopías es posible si no hay cambios estructurales en el sistema de producción agrícola y ganadero del país. Es crucial la construcción del poder desde abajo para confrontar estas estructuras y la lógica ecocida que representan.



Conclusiones

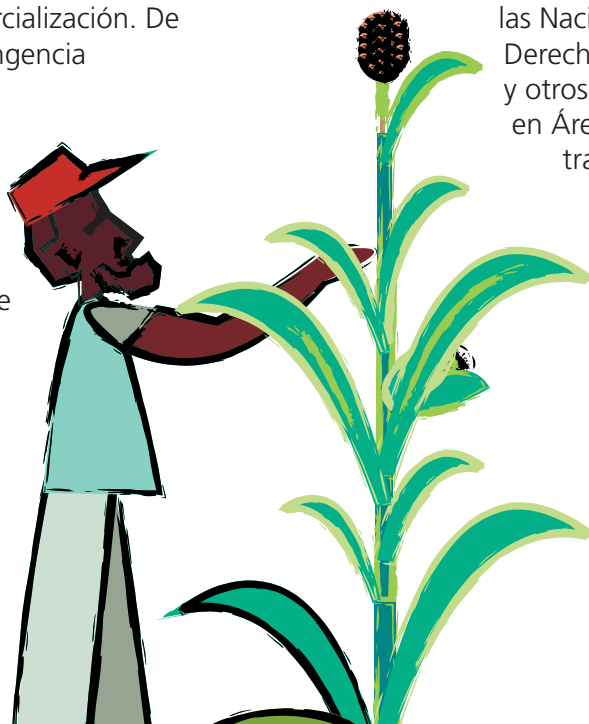
Un requisito que han desarrollado las compañías capitalistas para sobrevivir es crecer y expandirse y, para lograrlo, necesitan abrir nuevas fronteras para poder intensificar la producción a un menor costo. La expansión de dichas fronteras no solo ocurre a través de la ocupación física de los territorios, sino también a través de cambios tecnológicos beneficiosos para ellas (Moore, 2013).

En el caso de las compañías agrícolas capitalistas (específicamente, el maíz industrial en Ecuador), se han creado nuevas fronteras mediante la imposición de semillas híbridas, variantes de alto rendimiento y pesticidas a productores y campesinos, con la esperanza de que algún día podrán imponer semillas genéticamente modificadas. Esta tenue disposición de la vida campesina ha apartado a los agricultores de su conocimiento, sabiduría y prácticas agrícolas tradicionales, y les ha costado su autonomía económica, productiva y laboral. Las comunidades campesinas han pasado de un modelo agrícola diseñado para garantizar la soberanía alimentaria local, regional y familiar, a un modelo industrial. El estado ha utilizado crisis sucesivas para profundizar en este cambio mediante políticas públicas que benefician a la industria.

La pandemia de COVID-19 ha mostrado que las comunidades campesinas más resilientes han sido aquellas que conservaron sus semillas, implementaron métodos agroecológicos y gestionaron cadenas de comercialización. De una crisis a otra, de una contingencia a otra, fue fortalecida la construcción de un nuevo campesino: homogéneo, consumidor, endeudado, encadenado. Los niveles de productividad son bajos, se usan más semillas híbridas o de alto rendimiento, y se aplican insecticidas más peligrosos a los cultivos. En medio de la crisis de COVID-19, se ha revelado una nueva amenaza, la cual se expresa a nivel regional: la posible entrada

de semillas genéticamente modificadas. Esta intención denota poco respeto por el Artículo 401 de la Constitución, y revela el modo en el que la crisis en el sector del maíz está siendo erigida por el estado y las compañías agroindustriales.

En este ensayo hemos mostrado cómo ha sido aplicada la doctrina de crisis cuando se han experimentado contingencias alimentarias y fitosanitarias, terremotos y pandemias, para adoptar políticas que favorecen a grupos poderosos, generando inseguridad, deudas y dependencia en las economías campesinas; y la destrucción de la naturaleza y erosión de la agrobiodiversidad. Para enfrentar esta situación, las organizaciones campesinas y la sociedad civil que participaron en la construcción de la declaración del 2008 sobre un país libre de organismos genéticamente modificados y los preceptos fundamentales de la soberanía alimentaria que incluyen acceso a la tierra, el agua y la agrobiodiversidad, o que participaron en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otros Pueblos que Trabajan en Áreas Rurales, continúan trabajando por una agricultura campesina autónoma y los derechos de la naturaleza.



Apéndice 1:

Compañías que se benefician de la cadena de valor del maíz industrial

Tabla 2: Compañías que distribuyen semillas de maíz certificadas

Compañía comercial	Semilla certificada	Compañías transnacionales que son propietarias del Registro de Semillas
AGRIPAC	Copa, Batalla	Semillas Valle
	Trueno*, Triunfo*	Cruiser-Syngenta
	PAC 105, Dow 2b604	Dow-DuPont
	Dekalb 7088*	Monsanto
Ecuaquímica	Somma*	Syngenta
	Dekalb 7088*	Monsanto
	DAS3385	Dow-DuPont
Farmagro	Advanta 9313	Syngenta
	Pioneer P40039, DAS3383	Dow-DuPont
Unidad Nacional de Almacenamiento EP	DAS3383	Dow-DuPont
	Dekalb 7088*	Monsanto
	Triunfo	Cruiser-Syngenta
	H551, H 553, H 824	INIAP
Pronaca-INDIA	BM-905, S-505, BM-207	Biomatrix
Fertisa	Centella	Interoc custer

Source: ECUASEM. Elaboration: Alexander Naranjo

Compañía comercial	Semilla certificada	Compañías transnacionales que son propietarias del Registro de Semillas
Interoc	Centella, Emblema 777*, Insignia 105	Interoc custer
Crystal Chemical	Pioneer P3862	Dow-DuPont
	Agri 350	Agricomseeds
Del Monte	Advanta 9735	Syngenta
El Agro	NS 82	BASF
Solagro	TR 493W	Solagro
	ARG-107 ARG 109	Argenetics

*Líder en ventas

Fuente: ECUASEM. Elaboración: Alexander Naranjo

El apoyo estatal por medio de programas de promoción y subsidio ha garantizado a estas compañías el control total del mercado de semillas de maíz, colocándolas entre las compañías más importantes del país.

Tabla 3: Posicionamiento de las empresas de insumos de agronegocio en 2018

Compañía	Posicionamiento nacional	Porcentaje de venta de insumos	Ingreso total en millones USD
Pronaca	5	53.7	967.2
Agripac	43	17.3	311.8
Ecuaquímica	76	10.9	196.2
Fertisa	164	6.0	108.6
Interoc	224	4.6	82.9
Farmagro	300	3.5	63.1
Del Monte (INMONTE)	438	2.3	42.1
Crystal Chemical	743	1.3	23.5
Solagro	2 259	0.4	6.9

Fuente: Recopilado por los autores, utilizando datos de EKOS (2019)

Referencia

- Acción Ecológica. 2017. Tribunal de Pueblos Fumigados. En: Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos. <https://verdadparalavida.org/tribunal-los-pueblos-fumigados/>
- Acción Ecológica. 2013. Encadenamientos, contaminación exportaciones... ¿Y nuestra alimentación? Análisis de la nueva matriz productiva para el agro. *Alerta Verde* 168.
- Agurto, V. 2017. "Cadena de valor de maíz duro en la zona de Mocache, provincia de Los Ríos". Proyecto de Investigación Previo a la Obtención del Título de Ingeniera en Administración de Empresas Agropecuarias. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias Agrarias.
- Álvarez, S. 2001. De huancavilcas a comuneros. Relaciones interétnicas en la Península de Santa Elena, Ecuador. Quito: Abya Yala. CODENPE. 2da. Edición.
- Best, B. y Kessler, M. 1995. Biodiversity and conservation in Tumbesian Ecuador and Peru. Cambridge: BirdLife International.
- Bravo, E. 2018. *Ecología política de los desastres. El terremoto del 16 de abril en Manabí*. Abya Yala UPS.
- Bravo, E. y León, X. 2011. Monitoreo participativo del maíz ecuatoriano para detectar la presencia de proteínas transgénicas. *La Granja*. 17(1): 16–24.
- Colectivo Libre de Transgénicos. 2020. Open letter facing the actions of MAG and AGROCALIDAD. 18 May.
- Daza, E. 2014. Transformación productiva, estado y agronegocio: Coyuntura agraria 2013–2014. Línea de Fuego 16 diciembre. <https://lalineadefuego.info/2014/12/16/transformacion-productiva-estado-y-agronegocio-coyuntura-agraria-2013-2014-por-estaban-daza/> [Accessed November 2020].
- Daza, E. 2016. Vulnerabilidades de la "década ganada": Desencuentro frente a la crisis del maíz amarillo duro. *Revista Gestión* 266. https://revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/266_004.pdf [Accessed November 2020].
- El Universo. 2017. Estragos por la fumigación de plagas en Manabí. 19 March. <https://www.eluniverso.com/noticias/2017/03/19/nota/6095365/estragos-fumigacion-plagas> [Accessed November 2020].
- El Telégrafo. 2016. Al menos 17.000 voluntarios han sido convocados para ayudar a los damnificados. 5 May. <https://goo.gl/2CNgyz> [Accessed November 2020].
- Ecuador Libre de Transgénicos. 2020. Letter addressed to the judges of the Constitutional Court of the Republic of Ecuador. <http://agenciaecologista.info/wp-content/uploads/2020/07/carta-al-IICA-1.pdf> [Accessed November 2020].
- Ekos. 2019. Ranking Empresarial. <https://www.ekosnegocios.com/ranking-empresarial> [Accessed November 2020].
- ESPAC (2018). Ecuador en cifras. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/>
- FIAN Ecuador. 2020. [Interview with] Luigin Barzola "Desde el 2015, no ha sido rentable, no hay utilidad en el cultivo de maíz duro". In: *Manos que nos alimentan* 9 August. <http://www.fianecuador.org.ec/luigin-barzola-desde-el-2015-no-ha-sido-rentable-no-hay-utilidad-en-el-cultivo-de-maiz-duro/> [Accessed November 2020].

- FIAN Ecuador, Instituto de Estudios Ecuatorianos- IEE, Observatorio del Cambio Rural-OCARU, Unión Tierra y Vida y FIAN Internacional. 2020. ¿Crisis alimentaria en Ecuador?. <https://porlatierra.org/docs/ef303a4a652990d1e6fa04aa725a0656.pdf> [Accessed November 2020].
- Fundación Aldea. 2020. Comunicado Soberanía Alimentaria y COVID-19 en Ecuador. <http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/wa43rzh2j5j364lapm4m5yledsspcy>. [Accessed November 2020].
- Gaibor, J. 2018. Desarrollo de la agroindustria en la transformación de los sistemas productivos, modos de vida y la salud en la región agraria sur occidental del Ecuador. Caso: Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos. Tesis previa la obtención el título de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito.
- Gortaire, R. 2011. Agroecología en el Ecuador. Proceso histórico, logros, y desafíos. *Antropología Cuadernos de Investigación* 17: 12–38.
- Houtart, F. 2016. El desafío de la agricultura familiar campesina para Ecuador. In: F. Houtart and M. Laforge (Ed.) *Manifiesto para la agricultura familiar campesina e indígena en Ecuador*. Instituto de Altos Estudios Nacionales.
- Kay, C. 2001. Los paradigmas del desarrollo rural en América Latina. In: F.G. Pascual (Ed.) *El mundo rural en la era de la globalización: incertidumbres y potencialidades*. Madrid: Universidad de Leida y Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación.
- Klein, N. 2014. La doctrina del shock: *El auge del capitalismo del desastre*. Buenos Aires: Paidós.
- La Hora. 2018. *Corte Constitucional realizó audiencia sobre semillas y cultivos transgénicos*. 15 May. <https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102156826/corte-constitucional-realizo-audiencia-sobre-semillas-y-cultivos-transgenicos> [Accessed November 2020].
- León, X. 2018. Agroindustria y soberanía alimentaria en Ecuador. *Elikadura* 21. Documento No. 4.
- León, X. y Yumbra, M. 2010. El Agronegocio en Ecuador el caso del Maíz. Informe. Acción Ecológica Quito – Ecuador.
- MAG (Ministry of Agriculture). 2019. *Informe de rendimientos objetivos Maíz Amarillo Duro*, invierno 2019. <https://fliphtml5.com/ijia/xfmi/basic>. [Accessed November 2020].
- Moore, J. 2013. El auge de la ecología-mundo capitalista. Las fronteras mercantiles en el auge y decadencia de la apropiación máxima. *Laberinto* 38: 9–26.
- Papuel, W. (2015). *El balanceado depende del precio del maíz*. Revista Líderes. 2015.. 28 June. <https://www.revistalideres.ec/lideres/produccion-balanceado-depende-precio-maiz.html> [Accessed November 2020].
- Piperno, D. 2011. The origins of plant cultivation and domestication in the New World tropics. *Current Anthropology* 52(S4): S453–S470.
- Recalde, V. y León, X. 2020. La disputa entre Soberanías y el Estado (autonomía y centralización) en la Construcción y Práctica de la Soberanía Alimentaria para el Desarrollo Rural en el Ecuador. Unpublished mimeo.
- Reyes, S. y Paucar, E. 2017. 82 281 hectáreas de maíz están afectadas por las plagas. *El Comercio*, 17 March. <https://www.elcomercio.com/actualidad/hectareas-maiz-gusano-plagas-lluvias.html> [Accessed November 2020].
- Teubal, M. (1995). Internacionalización del capital y complejos agro industriales: Impactos en América Latina. In: M. Teubal (Ed.) *Globalización y expansión agroindustrial: ¿Superación de la Pobreza en América Latina?*. Buenos Aires: Ediciones Corregidor.

Tapia, C. y Morillo, E. 2006. Diversidad agrícola andina. Ecuador *Terra Incognita*, 42.

Timothy D, Hatheway W, Grant, U, Torregroza M, Sarria and Varela D. 1966. *Razas de maíz en Ecuador*. ICA -OIE. Boletín Técnico 12.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., y Davis I. (2003). *At Risk: natural hazards, people's vulnerability and disasters*. London: Routledge. Second Edition.

Zambrano, G. 2016. Plan Semillas de maíz duro de alto rendimiento (MAGAP), costos de producción y rentabilidad en el Cantón Mocache provincia de Los Ríos. Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Técnica Estatal de Quevedo.



